

Propiedad intelectual para arquitectos. Manual de uso y entretenimiento.

Texto: BLANCA CORTÉS.
Abogada-CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Entendemos perfectamente el concepto de propiedad intelectual asociado a un diseño, obra musical o invento de aplicación tan directa como un fármaco o una bebida refrescante. Sin embargo, la propiedad intelectual de la arquitectura navega en un mar de indefiniciones y ambigüedades que sistemáticamente suscita recelos en los clientes, instituciones y en los propios arquitectos, quienes, en ocasiones, aceptan la vulneración de sus derechos ante la perspectiva de ser incomprendidos o aparecer ante los demás como seres caprichosos que olvidan que la arquitectura es un bien común. Con ello se pierden una serie de valores añadidos, pues la elección de un arquitecto, el uso intencionado de su autoría como valor o el cuidado esmerado de su obra son ingredientes de una sociedad culta y avanzada, como lo es la existencia de coleccionistas de arte o la presencia del mejor diseño gráfico en la señalética de un edificio. Por lo tanto, la propiedad intelectual puede ser concebida como un derecho amparado por la ley, pero también como una conquista social avanzada.

Como punto de partida, definamos que la propiedad intelectual protege la creación del intelecto humano en cualquier momento del proceso creativo, si bien no toda creación merece su protección. Así, no son protegibles las meras ideas ni las obras que no alcancen un cierto grado de *originalidad*, concepto que tanto doctrina como jurisprudencia han definido tradicional-

mente desde un doble ángulo: *originalidad objetiva*, equiparada semánticamente al concepto de novedad, y *originalidad subjetiva*, la cual defiende la protección de la creación siempre y cuando esta sea el reflejo de la personalidad del autor.

En el caso concreto de las obras arquitectónicas, y dado su carácter funcional, la tendencia es proteger aquellas obras que muestran cierta novedad y altura creativa, con exclusión, por tanto, de las construcciones comunes. En resumidas cuentas, solo será amparable aquella obra que tenga cuerpo real, sea novedosa y constituya un aporte de excelencia al contexto al que pertenece, una suerte de premio a la innovación que aporta al autor la posibilidad de ejercitar unos derechos morales y patrimoniales, tan desconocidos como poco ejercitados, por venir asociados directamente a una idea de conflicto indeseable para las partes.

Tal conflicto se produce en la práctica por la concurrencia de intereses distintos aunque de convivencia obligada, lo que hace a la arquitectura diferente de otras disciplinas plásticas. Así, en el escenario generado por el proyecto arquitectónico, conviven el titular/usuario de la propiedad material -*corpus mechanicum*-, el arquitecto y los derechos de propiedad intelectual generados por su obra -lo que técnicamente se conoce con el inspirador nombre de *corpus mysticum*- y, en ocasiones, el concreto interés público al que responde la obra arquitectónica y al que está llamada a satisfacer. Recordando a Vitrubio, tres elementos conforman el orden del universo aplicado al mundo de la arquitectura: *firmitas*, *utilitas* y *venustas*, y para cada uno de ellos hay un derecho de aplicación, que solo se nubla cuando se intenta introducir esa consideración de obra creativa, lo que conlleva la sustracción de parte de la propiedad al usuario para entregársela a la sociedad por medio del talento de un arquitecto innovador.

Algunas nociones básicas nos permitirán simplificar un territorio aparentemente subjetivo que, al menos en su aplicación cotidiana, no debería ser tal. Por ello, es importante avanzar que la citada escisión se traduce para ☐

Estas victorias judiciales deben ofrecer el mejor ánimo para incorporar la propiedad intelectual en el día a día del arquitecto, algo que no tiene como único objetivo la defensa de las agresiones o la debida preparación para un eventual litigio, sino el constituir una verdadera herramienta intelectual del proyecto arquitectónico

la ley en que los derechos patrimoniales -reproducción, distribución, comunicación pública y transformación- no se transmiten de forma paralela a la propiedad material, por lo que un arquitecto inquieto debe procurar que queden recogidos en un contrato con el futuro propietario de su obra -por otro lado, un momento libre de sospechas en el que las partes quieren entenderse-. La casuística es y puede ser ilimitada -desde la utilización de los edificios como escenario para la publicidad hasta la producción de *merchandising*, pasando por la prohibición de determinadas transformaciones o la obligatoriedad de que las acometa el arquitecto original-, y su objetivo principal no es el de limitar los derechos del propietario, sino, de nuevo, el de agregar valor y permitir al cliente visualizar que está adquiriendo algo valioso que, además de cumplir con la función pretendida, deberá ser tratado con una mínima sensibilidad.

Para ello, la legislación de propiedad intelectual, más allá de los derechos económicos, ofrece también al autor un extenso abanico de derechos morales de carácter indefinido e irrenunciable. En este sentido, nuestro arquitecto innovador deberá igualmente incidir en cómo ha de ser divulgada su obra y en qué forma, exigir el reconocimiento de su condición de autor y muy especialmente invocar el derecho a la integridad, entendido como la facultad de impedir alteraciones de su obra que supongan un perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.

Destacables son, al respecto, procesos recientes en los que los tribunales de justicia han declarado el interés de mantener la peculiaridad creativa e integridad de ciertas obras, amparándolas contra su destrucción, modificación o incluso cambio de enclave -*site-specific*-, siempre entendiendo tales acciones como atentados contra los intereses y la reputación de su autor.

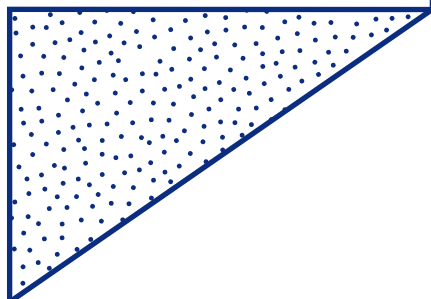
Deben citarse, al respecto: Selgas Cano contra EMVS, proceso en el que el juez condenó a esta última por la vía del incumplimiento contractual a ejecutar la obra de los arquitectos conforme al proyecto de ejecución; Santiago Calatrava contra el Ayuntamiento de Bilbao, por la alteración no autorizada del puente Zubi Zuri, en el que la Audiencia Provincial de Bilbao consideró que

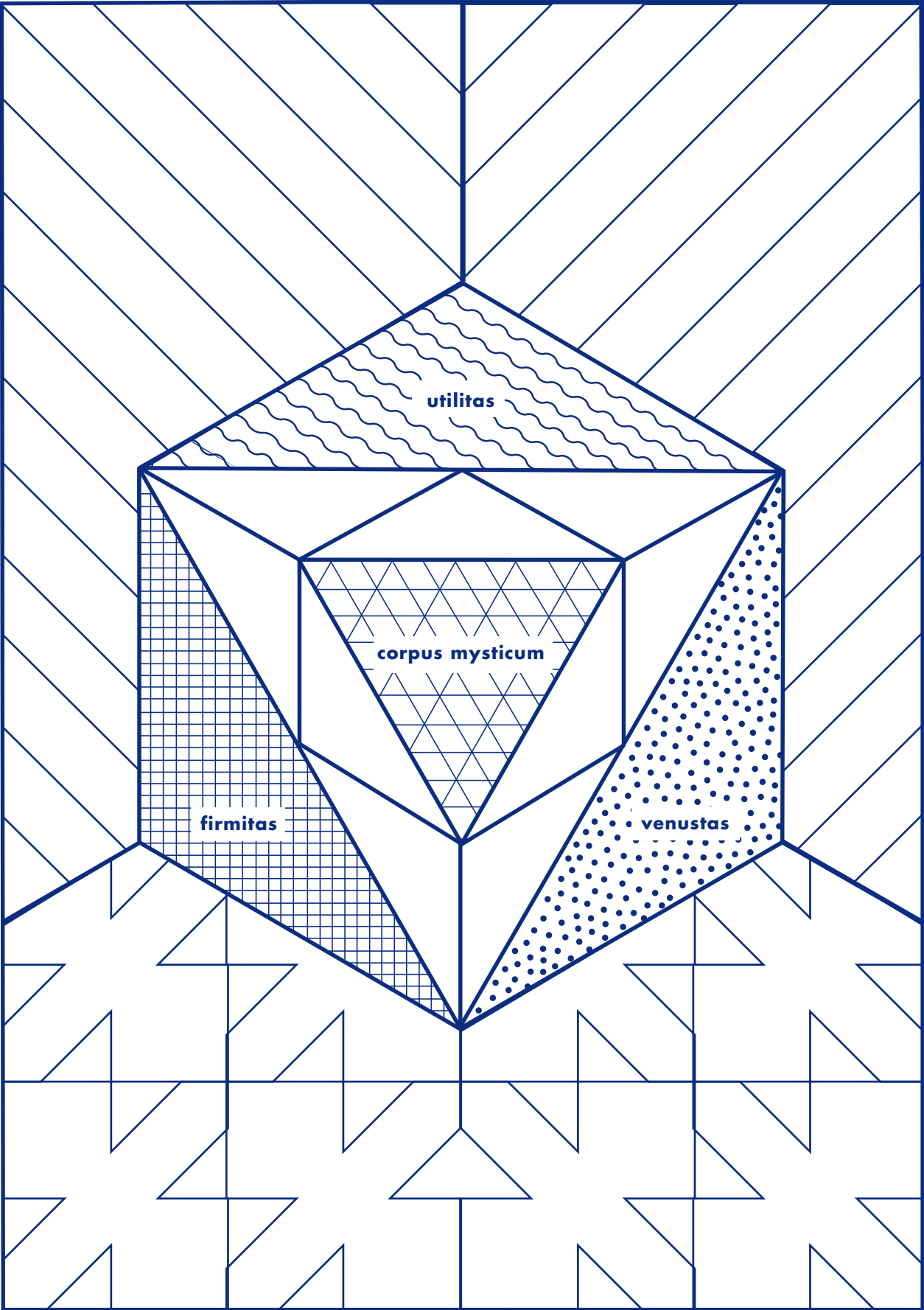
las alteraciones realizadas sobre la obra arquitectónica -retirada de balaustrada y anexión de la pasarela de Isozaki-, si bien podían ser necesarias para hacer más cómodo el tránsito de los ciudadanos por la ría, no legitimaban la lesión al derecho a la integridad de la obra; o, por último, el proceso instado por el escultor Andrés Nagel contra el Ayuntamiento de Amorebieta, quien tras

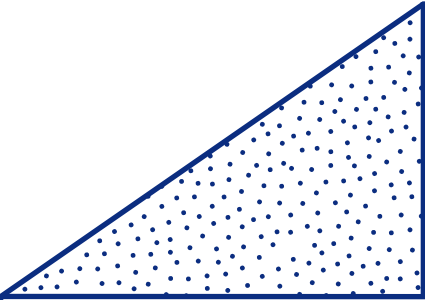
un largo peregrinaje judicial consiguió el reconocimiento de sus derechos morales por haberse modificado el emplazamiento para el que su obra fue concebida.

En todos ellos, se expresa con claridad la existencia de derechos morales, si bien, con toda lógica, se evidencia que no deben ser absolutos. Así, el conflicto entre la propiedad intelectual y material de una obra debe ser ponderado en cada caso concreto, y no puede ser relegado a la residualidad el derecho de propiedad material del usuario, de forma que en caso de discordancia entre ambos se imponga al dueño de la obra sacrificios desproporcionados susceptibles de ser encuadrados en un abuso de derecho. Se avanza, pues, hacia el equilibrio entre ambas posturas y muy especialmente hacia un análisis más sensible de los conflictos cuando se trata de obras, y con esto volvemos al principio, amparadas por la propiedad intelectual.

Estas victorias judiciales deben ofrecer el mejor ánimo para incorporar la propiedad intelectual en el día a día del arquitecto, algo que no tiene como único objetivo la defensa de las agresiones o la debida preparación para un eventual litigio, sino el constituir una verdadera herramienta intelectual del proyecto arquitectónico que tendrá así la exigencia de responder a la prometida altura intelectual y transmitirla con claridad para que sea apreciada. De esta forma, un instrumento árido y aparentemente burocrático puede tornarse en un recurso creativo dotado de una nada despreciable fuerza educadora que permita entender que propiedad, funcionalidad y derechos de propiedad intelectual son realidades compatibles. ☒







Intellectual property rights for architects: The A to Z

Text: BLANCA CORTÉS.
Lawyer-CMS Albiñana & Suárez de Lezo

The concept of 'rights' is not hard to understand when talking of a design, musical composition, an invention with a pharmaceutical purpose per se, or even those of a refreshing beverage. However, when we delve into the realms of architectural copyright we land ourselves in a foggy world of ambiguity and misunderstanding, often producing misgivings in clients and institutions. On occasion, this murkiness even affects architects themselves and, as a result, some turn a blind eye to possible infringements of their rights as artists when faced with the prospect of being misunderstood or appearing whimsical and ignorant of the fact that architecture is for everybody. Such undermining of their rights is bound to be detrimental to the work itself since the purposeful selection

of the specific architect as author, the personal choices of the architect, and the painstaking care taken over his work, are elements understood only to a highbrow society, akin to the worlds of art collection, graphic design and the *signalétique* of a building. As such, intellectual property is seen as a right protectable by law, but also as the domination of said laws by an advanced intellectual group.

Let us begin by defining 'intellectual property' as copyright applied to 'creation' at any and all points of the creative process. The distinction must be made that not all 'creation' deserves such protection: a certain degree of *originality* is required in order for ideas, projects and work to fall under this umbrella of copyright, and indeed some levels of restriction must be applied in order for copyright to serve its purpose. The concept of *originality* itself has traditionally held a twofold definition in legal terms; we have *objective originality*, semantically clarifying the need for pure innovation, and we have *subjective originality*, which defends an author's right to display and mirror his personality in his work.

When talking specifically of architecture, given its functional character, there is a tendency to protect only that which demonstrates high levels of innovation and ingenuity, largely excluding communal architecture. In short, only projects that have actually been built, are innovative and still fulfill their purpose within their context are awarded the possibility to exercise moral and ownership rights, which are both barely known and rarely put into practice due to their direct association with possible conflict between coexisting parties.

In practice, such conflict arises when opposing interests clash amidst the forced sharing of space and purpose, which in reality makes architecture wholly different to other artistic disciplines. The conflicting parties involved are the owner/user of the final product (the party concerned with the material property rights, also known as *corpus mechanicum*), the architect himself and the intellectual property rights his work merits (inspirationally termed as *corpus mysticum*) and, upon occasion, those parties concerned with perceived levels of satisfying public interest. According to Vitruvius, architecture must be 'sturdy, useful and beautiful', and all three requirements have a right to be applied. This is all clear and simple until the work is considered as 'creative', meaning certain user rights are waived in favor of society enjoying the work of an innovative architect.

Some basic notions allow us to clarify an apparently subjective territory that should not be so, at least not in its daily application. Said contradiction resulting from conflicting interests is interpreted legally in such a fashion that patrimonial rights (reproduction, distribution, public communication and transformation) are not exercised alongside pure material rights. As such, an uneasy architect must be meticulous when entering under contract with the future owner of the work, which is not the end of the world if the end result is greater piece of mind and understanding for all involved. There is, however, limited individualized treatment of projects, from the use of

These recent court victories should offer some encouragement to architects to incorporate the idea of 'copyright' in their day to day work, something which doesn't have as its only objective the defense against incursions or the preparation for legal action, but also serves as an important tool within architectural projects

buildings as advertising spaces to the production of merchandising, from not allowing certain transformations to obligatory changes that threatens the original design itself. The principal aim of individual treatment, though, must not be interpreted as limiting the owner's rights; in fact, this system serves to add monetary value and a sense of value for the owner, which, as well as serving the intended purpose, is worthy of respectful treatment.

Legislation of intellectual property rights, beyond economic rights, offers the author of the work an extensive range of moral rights that are both undefined and absolute. In this way, the innovative architect must explain how his work is to be interpreted, demand recognition of his authorship and, very importantly, invoke the right to the integrity of his work i.e. the prevention of alterations that could cause harm to his rightful interests or damage his reputation.

There are recent cases in which courts have upheld the importance of maintaining creative characteristics and the integrity of certain projects, protecting them from destruction, modification or even movement (i.e. site-specific), thereby understanding that any such actions are a threat to the interests and reputation of the author. With regards to this, we can cite the following cases: Selgas Cano vs. EMVS, in which the latter was found to be in breach of contract for failing to oblige the architects when it came to the execution of the work; Santiago Calatrava vs. Bilbao city council for unauthorized alteration to his *Zubi Zuri* bridge, in which although the Bilbao Provincial Court considered the changes made (removal of a section of balustrade and the incorporation of Isozaki's Gate) may have been necessary to greater suit the needs of the pedestrians crossing the river, they conceded that said changes violated the integrity of the original design; and lastly, the case of Andrés Negal vs. Amorebieta council in which, after a lengthy judicial process, the former received recognition of the violation of his moral rights by changing the placement of this sculpture from its intended location.

In all of these cases it is clear that moral rights exist and can be enforced, but it is also clear, and logical, that such rights should not be absolute. As such, the conflict

between intellectual and material property concerns must be considered on a case by case basis according to the project and its purpose, and the material rights of the owner or user cannot be forgotten – disproportionate sacrifices by the owner can be considered an abuse of said rights. Hence, equilibrium must be achieved between both parties, as must a delicate analysis of each in-

dividual case, taking us back to the beginning and the protection of intellectual property rights.

These recent court victories should offer some encouragement to architects to incorporate the idea of 'copyright' in their day to day work, something which does not only aim to defend against threat or serve a litigious purpose, but also supposed an important tool within architectural projects by calling for creative respect and its transmission in a clear and appreciable manner. This way, the dry and apparently purely bureaucratic concept of 'rights' can become a creative means to an end, an undeniable educatory force which allows us to understand that ownership, functionality and intellectual property rights need not be incompatible. ☒

